

La economía de la coca : La dimensión silenciada de la dependencia	Título
Castillo Gallardo, Mayarí - Autor/a	Autor(es)
Las Relaciones Internacionales de la Pobreza en América Latina y el Caribe	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO	Editorial/Editor
2012	Fecha
Colección CLACSO - CROP	Colección
Militarización; Monocultivo; Dependencia; Pobreza rural; Plantación de coca; Población indígena; Chapare; Bolivia;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20120308122219/10.Economia_Gallardo.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
 Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



MAYARÍ CASTILLO GALLARDO*

LA ECONOMÍA DE LA COCA

LA DIMENSIÓN SILENCIADA DE LA DEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN

“Desde hace cinco siglos, la fabulosa riqueza de Bolivia maldice a los bolivianos, que son los pobres más pobres de América del Sur. ‘Bolivia no existe’: no existe para sus hijos”

Eduardo Galeano

El siguiente artículo representa un intento de analizar el problema de la pobreza rural en el Chapare boliviano –uno de los ejes cocaleros más importantes de Bolivia y América Latina- en relación a los condicionantes económicos de carácter global que han marcado la trayectoria económica, social y política de la zona.

El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 24.500 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada

* Mayarí Castillo es Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Becaria del Programa CLACSO – CROP 2004. Fue investigadora y Coordinadora del Programa Internacional de Interculturalidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Actualmente cursa una Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México.

a la producción de cocaína¹. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o ex mineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca. En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico.

A pesar de ello y aún estando insertos –de manera directa o indirecta– en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente². Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “[s]e estima que del valor económico financiero generado por la economía coca - cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69). Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo.

La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías *extravertidas*, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio.

1 Se estima que el 90% de la hoja de coca producida en la zona va dirigida a la producción de cocaína (Lanza, 1999:35).

2 La pobreza afecta en las zonas rurales de Bolivia al 94% de la población, siendo los departamentos con enclaves cocaleros los que figuran entre los más pobres (Lanza, 1999:25).

El siguiente artículo es una síntesis de una investigación de carácter cualitativo realizada entre noviembre de 2004 y agosto de 2005³. En un primera parte se establecen los principales elementos teóricos que guiarán la reflexión sobre el tema, mostrando su alcance explicativo para el análisis de la economía boliviana y para el rol de la coca en este entramado. A continuación se analiza el lugar de la zona en estudio, el Chapare boliviano, en el circuito internacional del narcotráfico para posteriormente observar el impacto de la economía de la coca y su erradicación en la pobreza rural de la zona. Una vez expuestos estos elementos efectuaremos el tránsito necesario entre los conceptos teóricos planteados de manera inicial y la data etnográfica expuesta en los capítulos anteriores, con el fin de dar cuenta de la pregunta fundamental de este artículo ¿existe una relación entre el narcotráfico y la pobreza rural de las zonas productoras de hoja de coca?

Debido a que la investigación se centrará en el período que va desde los años 1970 al 2004, hemos distinguido, dentro de este intervalo de tiempo, tres períodos que nos permitirán mejorar la comprensión del lector frente a este fenómeno:

1. PERÍODO DE INICIO DE LA ECONOMÍA DE LA COCA (1970-1980)

Este período de tiempo se encuentra caracterizado por el inicio de una intensiva colonización del área. El Chapare es una zona que se origina en una colonización bastante tardía, pensada y proyectada desde el estado boliviano como forma de incorporación de las tierras bajas a la economía, favoreciendo así la integración nacional y una mejor distribución del ingreso. De la misma manera, se pensó la zona como válvula de escape de zonas pauperizadas como Potosí, Oruro y Chuquisaca y como manera de diversificar la producción agrícola, aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones (Flores y Blanes, 1985).

La colonización se vio intensificada durante este período debido al paulatino decaimiento de la actividad minera boliviana, cuya producción de estaño constituyó el eje central de la economía del país durante la primera mitad del siglo veinte. Con el progresivo cierre de las minas, el gran número de obreros que se habían dedicado a

3 Por esta razón llamará la atención del lector que no se incluya un análisis de la problemática de la coca en el contexto del gobierno encabezado por uno de los principales líderes sindicales cocaleros, Evo Morales. Este artículo excluye expresamente este último período, puesto que busca desentrañar la relación complementaria entre economía de la coca y la economía formal, en el marco de las relaciones centro-periferia. En cierta forma, el gobierno de Evo Morales representa un intento por subvertir estas condiciones de intercambio desigual, por lo que no cabe acá incluir su gestión en este artículo.

esta actividad debió migrar en busca de oportunidades laborales y de subsistencia. La colonización proyectada desde el Estado se basaba en la creación de asentamientos dirigidos, pero en el Chapare la colonización espontánea superó con creces estos asentamientos, constituyendo sus propios centros poblados basados en la autogestión de los mismos colonos, sus redes familiares y el importante rol de los sindicatos al interior de la zona. Según Lanza, a principios la década del ochenta la población del Chapare había llegado a un número cercano a las 100.000 personas, sin contar la gran cantidad de población flotante que posteriormente abandonaría el Chapare producto de las políticas de erradicación de cultivos (Lanza, 1999:17).

En el marco de una colonización que por su espontaneidad no cuenta con apoyo en torno al tema del desarrollo agrario, como había sido proyectado en su momento, los campesinos comienzan a producir hoja de coca, la que posteriormente se transformaría en el principal cultivo de la zona. Esta hoja de coca fue dirigida, en parte, al consumo local y, en su gran mayoría, a la elaboración de cocaína en laboratorios que se encontraban fuera de la región.

Durante este período, la situación de los colonos es bastante precaria en términos de servicios básicos: debido a que los asentamientos espontáneos son mayoría, no existe capacidad estatal de equiparlos con escuelas, centros de salud, comunicaciones y redes viales. En la mayoría de los poblados, es el sindicato quien asume la labor de repartir las tierras y organizar pequeñas escuelas rurales, así como también realizar la construcción de algunos caminos. Ello va, poco a poco, configurando un actor que será clave en los procesos políticos posteriores: la organización sindical.

2. PERÍODO DE AUGE DE LA ECONOMÍA DE LA COCA (1980-1990)

Durante este período, la cantidad de población en el Chapare se incrementa sustantivamente y la producción de hoja de coca se hace intensiva. La mayor parte de los predios individuales y comunitarios se utilizan en el cultivo de coca. En esta etapa, la producción de hoja alcanza su máximo histórico en el año 1987 con 151.547 Toneladas Métricas (SUBDESAL Citado en: Lanza, 1999: 60). Cabe señalar que estas y otras cifras referidas al volumen e importancia económica de la producción de hoja de coca representan aproximaciones tentativas que difieren, a veces radicalmente, unas de otras. Esto es particularmente notorio con la estimación de la importancia de la producción de la hoja de coca en el PIB de Bolivia en el año de mayor auge. Las cifras varían de un 55% (UDAPE) a un 95% (ILDIS) para el año 1984. Las variaciones de existentes entre las cifras oficiales y aquellas otorgadas por las ONG especializadas en el tema nos hablan no sólo de la

gran dificultad existente para contabilizar los ingresos provenientes de esta actividad ilícita, sino que también de tomas de posición de los diferentes organismos frente esta problemática, de las relaciones “narcotizadas” entre el Estado boliviano y los organismos internacionales y de la necesidad política de minimizar o maximizar el impacto del cultivo en la economía nacional.

A pesar de ello, existe coincidencia entre los estudiosos del tema en que durante este período es cuando la economía de la coca posee mayor importancia en la economía nacional, razón por la cual hemos delimitado así el período. Si bien no existe exactitud en la estimación de la importancia de la economía de la coca a nivel del PIB, consideraremos que la centralidad del conflicto cocalero y el diseño de políticas públicas orientadas hacia el sector nos muestran que este cultivo no posee, en ningún caso, una importancia marginal en la economía boliviana, ya que las más tímidas estimaciones le asignan un lugar central durante este lapso de tiempo.

Durante este período, la situación de los campesinos de la zona está un poco más consolidada en términos de servicios, se establecen ciertas prioridades estatales en torno al establecimiento de escuelas y luz eléctrica, como también al alero de los proyectos de desarrollo alternativo (proyectos que van a la par con las políticas violentas de erradicación). Se construyen algunas redes viales de importancia que permiten a los colonos acceder con mayor facilidad al transporte a los centros más poblados. También pueden encontrarse los inicios de las políticas de erradicación que marcarán una caída en la economía de la hoja de coca ya entrada la década del noventa y que, al final de este período, configuran un escenario de extrema violencia en la zona. En este punto es clave la aprobación en 1988 de la Ley N° 1008 o la “Ley maldita”. Además comienzan a tomar un importante rol instituciones como la Drug Enforcement Administration (DEA), fuerza especializada norteamericana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), todos organismos militares dedicados al control del cultivo de hoja de coca, la erradicación violenta y la represión de las manifestaciones de los sindicatos cocaleros.

3. PERÍODO DE CAÍDA DE LA ECONOMÍA DE LA COCA (1990–2005)

Durante este período se intensifican las políticas de erradicación de la hoja de coca, lo que determina una baja en la producción de la misma y un escenario de alta conflictividad social en el área. Esto repercute en la disminución de la población del Chapare y quienes permanecen en la zona se ven expuestos a una militarización y a la implantación de una frontera entre el Chapare y los centros urbanos aledaños. Se esti-

ma que para el año 1993, la producción de hoja de coca había bajado a 90.010 toneladas métricas y que durante este período representa no más del 12% del PIB de Bolivia, continuando en descenso en los años posteriores (Lanza, 1999).

La característica principal de este período es la tendencia a una depresión económica en la zona y un clima extremadamente violento: se establece de forma permanente la presencia militar en la zona. Estados Unidos declara que la lucha contra las drogas es un problema de seguridad nacional y tipifica el conflicto como una “guerra de baja intensidad”, con lo que se hace presente directamente en el área, con apoyo logístico y militar. Además, dicho país, condiciona los recursos destinados a los planes de desarrollo alternativo a su mecanismo de certificación, que es el cumplimiento de una serie de condiciones puestas anualmente por el gobierno norteamericano a los países que reciben su ayuda financiera⁴. Las condiciones para Bolivia durante este período son: la erradicación anual de 5.400 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, el desarrollo de un plan de erradicación a mediano y largo plazo y la firma de un nuevo tratado de extradición entre Estados Unidos y Bolivia, que asegure la impunidad de las fuerzas militares en la zona. Esto aumenta la resistencia de los sindicatos de productores, configurando un enfrentamiento que continúa hasta la actualidad y que ha potenciado el surgimiento de un nuevo actor en la escena política boliviana: las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, quienes a través del Movimiento al Socialismo (MAS) han logrado posicionarse como un sujeto de gran importancia (Castillo, 2004).

CAPÍTULO I. LA ECONOMÍA BOLIVIANA, LA ESPIRAL DE LA DEPENDENCIA

Los procesos esbozados en los tres períodos caracterizados anteriormente no pueden ser comprendidos si se limita la mirada al ámbito estrictamente local. Es por ello que uno de los desafíos de este artículo es poder leer lo local desde una perspectiva teórica de largo alcance, que permita comprender la inserción del Chapare y de Bolivia en general en un entramado de relaciones económicas internacionales que han determinado un desarrollo dependiente en el sistema económico mundial. Para ello, utilizaremos principalmente los desarrollos de los autores que han trabajado el tema de la teoría de la dependencia (Marini, 1991; 1979a; Dos Santos, 2003; Hinkelammert, 1974; Bambirra, 1974; 1978).

4 Cabe señalar que de los 19 países que deben someterse al proceso de certificación, 12 son latinoamericanos.

Para la economía neoclásica, la división internacional del trabajo genera una cierta especialización de los países en torno a ventajas comparativas, la que para el caso de América Latina se habría consolidado en la producción y exportación de materias primas a los grandes centros industriales. De esta manera, las ganancias y los frutos del progreso técnico, que se gestan en los países más desarrollados, tienden a distribuirse de manera relativamente equitativa a través del intercambio internacional (Prebisch, 1999). Desde esta perspectiva, el subdesarrollo, la pobreza y la marginalidad de los países del tercer mundo son producto de la falta de mayor productividad y de un mayor intercambio que, con el conjunto de medidas adecuadas y el libre juego del mercado, pueden llegar a ser superados.

Para los teóricos de la dependencia, esto no sucede necesariamente así. Se plantea una profunda crítica, mostrando que desarrollo y subdesarrollo son caras de la misma moneda y que el desarrollo en los países centrales genera necesariamente marginalidad, pobreza y dependencia en los países periféricos. Éstos no pueden aspirar a desarrollar sus economías de la misma forma que los países desarrollados, por una serie de particularidades que Marini denominará *capitalismo sui generis*. Para este autor, el término precapitalismo es inadecuado puesto que aún cuando estas relaciones capitalistas se desarrollen cabalmente, existen elementos referidos a su funcionamiento y estructura global que condicionan un resultado distinto (Marini, 1979a; 1979b; 1991). Estas características se forjan en el momento de la incorporación de América Latina a la economía mundial, la cual se constituye como un factor en extremo relevante en el desarrollo del capitalismo mediante varios fenómenos: permite la acumulación de medios de pago (metales preciosos), la especialización de una parte de la sociedad en actividades industriales por la vía de satisfacer las demandas de productos agropecuarios de las grandes potencias y la formación de un mercado de materias primas industriales.

Pero sin duda, para este autor, el rol más importante de América Latina es que permite que *el eje de acumulación de la economía industrial pase de una plusvalía absoluta a una plusvalía relativa* (Marini, 1979a; 1979b; 1991). Es decir, la acumulación pasa a depender más del aumento de la capacidad productiva que de la sobreexplotación del trabajo. Al proveer productos agropecuarios exportados a bajo costo, la reproducción de mano de obra en los países desarrollados es más barata, por lo que la plusvalía es mayor y existe una mayor acumulación. De esta manera, los países capitalistas avanzados enfrentaron su baja tendencial de la tasa de ganancia a través de la incorporación de tecnologías que aumentarían la productividad del trabajo.

En América Latina, en cambio, la producción siempre estuvo ligada a un mercado externo, por lo que la sobreexplotación y nula capacidad de compra de los trabajadores no implicaba efectos en la contracción del mercado. Es por ello que al enfrentarse a la necesidad de aumentar sus ganancias por la constante desvalorización de los bienes primarios, América Latina opta por el aumento de la producción mediante la *sobreexplotación de la mano de obra*, en lugar de un aumento de la productividad de la misma (Marini, 1979a; 1979b; 1991). Esto implica que las naciones latinoamericanas: “[d]eban ceder gratuitamente parte del valor que producen, y que esta cesión o transferencia se acentúe en favor de aquel país que les vende mercancías a un precio de producción más bajo, en virtud de su mayor productividad” (Marini, 1991:5). En vez de tratar de corregir el desequilibrio entre el costo de las mercancías exportadas y el precio pagado, se optó por producir más a costa de la sobreexplotación de los trabajadores.

Mientras que la gran masa de latinoamericanos no logra constituir un mercado interno importante, las élites generan necesidades de consumo que no son capaces de ser satisfechas por la producción de nuestro continente, por lo que se hace necesario realizar importaciones. Cuando se producen las crisis de la economía capitalista internacional, el eje de acumulación latinoamericano pasa a la industria. Pero en lugar de realizar, como los países capitalistas avanzados, una transformación de los artículos suntuarios en artículos de consumo popular, debido a que el auge industrial se presenta en momentos en que la economía mundial requería de ellos y también a la escasa capacidad de compra de la gran masa de latinoamericanos, la acumulación derivada de la industrialización se realiza nuevamente en función de la sobreexplotación de la mano de obra y el aumento de precios.

Posteriormente esta sobreexplotación sería aprovechada por capitales extranjeros, los cuales ven en los países latinoamericanos también la posibilidad de obtener mayor plusvalía y generar un mercado para su industria pesada y de equipos y maquinarias que para los países avanzados ya se encontraban obsoletos. Frente a esta sobreexplotación del trabajo que impide a los países latinoamericanos consolidar un mercado interno para sus productos, nuevamente la producción se vuelca hacia el mercado mundial, reproduciendo así la dependencia primigenia (Marini, 1991).

Estos fenómenos pueden ser claramente identificados en Bolivia, cuya actividad económica estuvo en un primer momento ligada a la producción de metales preciosos y posteriormente a la extracción y exportación de estaño. Considerando que el mercado interno no era determinante para la minería de plata y de estaño, se generó una importante concentración del ingreso que excluyó brutalmente a la ma-

yoría de los bolivianos, en especial al sector rural. La baja del precio del estaño fue compensada con un aumento de la producción vía sobreexplotación de la mano de obra.

La exclusión de la mayor parte de la población de los millonarios dividendos de la minería del estaño acentuó las contradicciones en el seno de la sociedad boliviana, impulsando el surgimiento de uno de los actores más importantes para la escena política de Bolivia en el siglo XX: los sindicatos mineros. Éstos lograron una gran influencia en la escena política nacional, a través del control que ejercían sobre la Central Obrera Boliviana (COB). De esta manera, las demandas emanadas de los sindicatos mineros no sólo ganaron legitimidad y apoyo en el movimiento social en conjunto, sino que lograron posicionar a este actor como un poder paralelo dentro de la inestable vida política de este país durante un período de tiempo.

La influencia de la organización sindical minera ha marcado el desarrollo de los movimientos sociales posteriores, especialmente en la zona cocalera. Durante la dictadura militar de Hugo Banzer (1971-1978) muchos de los principales dirigentes sindicales fueron radicados de manera forzada en la zona del Trópico de Cochabamba, donde gestaron las primeras organizaciones sindicales en el área, traspasando sus aprendizajes a la primigenia organización de la zona.

El declive definitivo de la economía del estaño abrió un horizonte de incertidumbre: la incapacidad de absorción de la mano de obra liberada de las minas y el debilitamiento del principal actor político de la época planteó preguntas respecto al tipo de desarrollo que se estaba llevando a cabo. La profunda crisis encontró tres vías de solución: 1) una apertura económica y capitalización de empresas públicas; 2) un importante apoyo financiero internacional; y 3) la economía de la coca. Los pasos dados para subsanar la crisis generada por la caída del estaño consolidaron de manera más flagrante la situación de dependencia de la economía boliviana: neutralizado el principal actor del mundo sindical -los mineros de la COB- comenzó la desarticulación del Estado como actor económico de importancia y se optó por una liberalización de la economía.

El Estado boliviano recurrió a la privatización de las empresas estatales a través de una capitalización, que implica que un socio estratégico adquiere la empresa pública comprometiéndose a invertir lo mismo que el Estado y repartiendo anualmente los dividendos entre ambas partes. Con dicho sistema, Bolivia logró atraer una gran cantidad de inversiones extranjeras, principalmente en el ámbito de los hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y transportes. Esto ha determinado un profundo cambio en la estructura económica, la distribución del ingreso y las relaciones políticas dentro del Estado

boliviano, configurando un poder paralelo y externo al poder político elegido soberanamente por los bolivianos (Grebe, 2002; Toranzo, 2002). Así también un tercio de los activos de la banca boliviana están en manos de la banca española (Santander y Banco Central Hispano).

La liberalización de la economía –decretada a través del ya famosísimo Decreto N° 21.060 en 1985- impactó fuertemente a la débil industria boliviana, generando una des-industrialización. Así, una gran masa de trabajadores que se sumaron a los mineros en su búsqueda de un empleo que nunca llegaba. Esta tendencia se mantuvo en el tiempo, permaneciendo hasta hoy el 70% de los bolivianos en empleos informales (Toranzo, 2002).

La situación de dependencia de Bolivia también encuentra expresión en la gran cantidad de asistencia financiera internacional, otra de las vías a las que se recurrió para subsanar la crisis. En los últimos doce años, Bolivia ha recibido por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). Así también ha podido reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados principalmente por Europa y hoy en día recibe financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos.

Semejantes ajustes no hubieran sido posibles, debido al agudo desequilibrio en la balanza de pagos y la creciente crisis económica, sin el sector silenciado de la economía boliviana: la economía de la coca. El conflicto armado en Colombia y la creciente demanda de los países desarrollados, especialmente de Estados Unidos, hicieron del cultivo de la hoja de coca un sustento básico de los ajustes estructurales realizados a partir de los lineamientos emanados del Consenso de Washington. Así, la economía de la coca aumentó el flujo de divisas y absorbió, justo a tiempo, la mano de obra excedente evitando un estallido social. No es casual que estas directrices se hayan llevado a la práctica en los momentos de apogeo de la economía de coca, cuando ésta representaba, como señalábamos anteriormente, un 64,4% del PIB. Y tampoco es casual que una vez puesto en marcha el proceso de capitalización de empresas públicas y apertura económica, la presión frente a la erradicación de este cultivo haya crecido a nivel internacional y nacional.

La importancia de la economía de la coca se manifestó también en el rol preponderante que comenzaron a tener los sindicatos cocaleros en la vida política nacional. De la mano de una profunda crítica al intervencionismo de Estados Unidos, a la liberalización de la eco-

nomía, a la privatización de los recursos estatales y una reivindicación de la hoja de coca como símbolo de la cultura andina y memoria de los pueblos indígenas, los sindicatos cocaleros, agrupados en las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, empezaron a posicionarse cada vez con mayor fuerza en la vida política de Bolivia, llegando en el año 2002 a obtener la segunda mayoría en las elecciones presidenciales con su candidato Evo Morales. Este movimiento representa la crítica descarnada del pueblo boliviano frente a un tipo de desarrollo que, como en los tiempos de la minería, excluye a la mayor parte de la población boliviana y se encuentra al servicio de los poderosos del mundo⁵.

DESPUÉS DE LOS AJUSTES ¿QUÉ PASÓ CON LA POBREZA EN BOLIVIA?

*“Dad a Dios lo que es de Dios
Y al gobierno de los ricos
Lo que es del gobierno de los ricos
Pero,
¿Qué más vamos a darle al gobierno de los ricos
Si con ayuda de su gobierno los ricos
Ya acabaron de quitármelo todo?”*

Roque Dalton

Después de estos cambios estructurales la situación boliviana no es muy distinta a la del resto de América Latina en los últimos años, que ha incrementado en 76 millones el número de pobres en relación a la década del setenta (O'Donnell, 1999). Sin embargo, la situación de Bolivia tiene matices bastante más dramáticos: la economía boliviana es hoy una de las más pobres de Latinoamérica y el problema se agrava cuando miramos lo acontecido en el sector rural, en el cual se inserta la economía de la coca.

En la década del noventa la proporción de pobres en el campo va desde el 91% a 97% del total de la población rural. Los datos para el año 2000 calculaban que en el mundo rural, las familias no superan los 80 dólares al mes en ingresos y que su distribución es extremadamente desigual (Laserna, 2003). Ello ilumina ciertos aspectos cuando consideramos que luego de la caída del estaño como bastión de la economía boliviana y el declive de la economía de la coca, Bolivia ha centrado principalmente su actividad económica en la exportación de

5 Para más detalles sobre el movimiento cocalero, su forma de organización, discurso político e importancia en la vida política nacional, véase: Agreda et al. 1996; Ballesteros et al. 2001; Castillo, 2004; Zegada, 2002; Stefanoni, 2003; 2004.

productos provenientes del agro (soja y madera), sumado a la exportación de gas. Dichas exportaciones de soja y madera se han impulsado, principalmente, con inversión extranjera y debido al bajo precio que obtienen en el mercado internacional, se repite la sobreexplotación de la mano de obra que mantiene a la mayor parte de la población rural bajo la línea de la pobreza. Ergo, la espiral de la dependencia sigue su curso. Esto se vuelve demasiado evidente cuando analizamos la balanza comercial de Bolivia para el año 1999, en la cual se exportaron 1051 millones de dólares y se importaron ¡1755 millones de dólares!

Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? Si bien las cifras ayudan a dimensionar un poco el fenómeno de la pobreza, la caracterización de ésta no puede pasar sólo por un criterio estadístico. Generalmente para determinar la pobreza se busca determinar el ingreso de los sujetos, se establece una canasta básica necesaria para la reproducción de un individuo y ello se traduce en dinero. La línea de indigencia está establecida por la suma de dinero necesario para comprar esta canasta, mientras que a la línea de pobreza se le suman gastos básicos como son vestimenta, transporte, vivienda, etcétera (Salama y Valier, 1996). Frente a estos criterios, uno de los desafíos, sobre todo para América Latina, es lograr una caracterización de la pobreza que incluya factores educacionales, culturales, étnicos y de género, considerando que para nuestro continente, la pobreza generalmente tiene rostro indígena.

Siguiendo con nuestro análisis de las economías latinoamericanas, la pobreza se inserta en este contexto como un producto ineludible del desarrollo dependiente de las economías de nuestro continente. Con el traspaso de la plusvalía hacia los centros desarrollados debido a la constante baja de precios de los productos primarios y la sobreexplotación de la mano de obra utilizada para contrarrestar aquello, el problema de la pobreza en nuestro continente no tiene perspectivas de mejorar en tanto no se transformen estas relaciones internacionales que determinan el desarrollo de nuestras economías.

En ese marco, vemos que la pobreza se inserta dentro de un complejo entramado de relaciones económicas locales, nacionales y mundiales. Es por ello que, para este trabajo, hemos querido realizar un intento por comprender la pobreza rural como un fenómeno dinámico, fruto de relaciones e interacciones más que un atributo de determinado sujeto o segmento de la sociedad. Es necesario también superar una caracterización abstracta y numérica de la misma, entendiendo que la pobreza rural posee elementos que no se limitan sólo a aspectos económicos, sino también culturales y sociales (Quijandría et al., 2000). Para ello, utilizaremos el concepto de pobreza rural del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el cual visualiza

tres características básicas: 1) niveles de ingreso inferiores a la cantidad mínima necesaria para obtener el conjunto básico de bienes y servicios para la familia, incluyendo la alimentación, aunque no se reduce sólo a ello; 2) exclusión y discriminación social y económica debida al origen étnico y de género; y 3) carencia o acceso limitado a servicios destinados a satisfacer necesidades básicas de las familias rurales –educación, salud, comunicaciones, etcétera– (Quijandría et al., 2000: 75). La utilización de este concepto responde a la necesidad de una caracterización cualitativa de la pobreza rural, que tome en consideración las particularidades geográficas, sociales, culturales y económicas de la unidad de estudio, así como también los cambios experimentados.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) existen dos tipos de pobreza, pobreza rural transitoria y pobreza rural estructural. Para los efectos de este estudio y con la intención de precisar el concepto anterior, pues nos aporta elementos contextualizadores y caracterizadores importantes, utilizaremos el concepto de *pobreza transitoria*, que: “incluye a familias de pequeños agricultores y campesinos sin tierra, de ambos sexos, especialmente vulnerables a los cambios producidos por los procesos de reformas estructurales, a las crisis cíclicas económicas internas y externas y a la inestabilidad social y política de los países. Este tipo de pobre suele poseer o tener acceso a pequeñas parcelas de tierra, tiene cierta relación con los mercados y sus ingresos se sitúan en el límite de la pobreza. Los cambios repentinos de relaciones económicas o las crisis afectan sus ingresos familiares agrícolas y no agrícolas causando declinaciones periódicas de sus ingresos y condiciones de vida” (FAO, 1998). Cabe destacar que la relación de estos campesinos con la economía nacional e internacional es de extrema vulnerabilidad, como lo destaca el concepto de la FAO. Esto refleja bastante bien la dependencia de los campesinos cocaleros frente a los vaivenes del mercado de la coca, razón por la cual hemos elegido esta definición.

Las preguntas y la incertidumbre creada tras la caída del estaño como eje de la economía en Bolivia han quedado sin responder, aún cuando ha pasado más de una década desde entonces. Bolivia aún se encuentra sumida en una creciente crisis económica: el crecimiento para año 2000 llegó a 2,37% y para el 2001 fue nulo (Toranzo, 2002). Estas tendencias se siguieron acentuando en el tiempo. Asimismo, ha experimentado una caída del producto interno bruto per cápita y sus exportaciones, por la crisis de sus mercados, no encuentran compradores. Si esta vez no hay válvula de escape, como en sus tiempos fue la economía de la coca, ¿cuál es el camino?

CAPÍTULO II. ECONOMÍA DE LA COCA, ¿VÁLVULA DE ESCAPE O DIMENSIÓN SILENCIADA DE LA DEPENDENCIA?

Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa el Chapare en la economía internacional de la coca? El negocio del narcotráfico involucra a una serie de países: aquellos que consumen, aquellos países denominados “de tránsito”, los que elaboran y exportan lo necesario para el procesamiento de la hoja de coca y los países productores. Si bien todos participan, los términos del intercambio son de carácter desigual y los beneficios de este millonario negocio no se reparten de manera equitativa entre todos los involucrados.

El lugar del Chapare en el circuito coca-cocaína ha ido variando a lo largo del tiempo y el impacto que ha tenido en la economía de país se ha visto también modificado. La inserción de manera significativa de la zona en la economía de la coca se inicia durante la década del setenta, punto que hemos marcado como hito en la periodización esbozada en nuestra introducción. Este período se encuentra caracterizado por la primigenia colonización del Chapare, el aumento de la población en la zona y la expansión de los cultivos de la coca, fenómenos determinados por tres factores: la profunda crisis económica provocada por el decaimiento de la producción de estaño, la baja de precios de los productos agrícolas y el aumento de la demanda y precio de la hoja de coca a nivel internacional.

El cierre de las minas de Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la pauperización del agro altiplánico liberó una gran cantidad de mano de obra que buscaba desesperadamente una fuente de ingresos. La colonización del Chapare y el cultivo de la coca fue la respuesta a su precaria situación. Así, mientras en 1978 (año desde el cual podemos encontrar cifras sobre el tema) existían 15.900 hectáreas de coca en la zona chapareña, en 1982 la cantidad de hectáreas cultivadas con este producto ascendían a 45.100 hectáreas (Comité Cívico Pro Cochabamba, 1988).

Pero ¿por qué cultivar coca? La respuesta es bastante simple: la baja constante de los precios de otros productos agrícolas, además de provocar la pauperización del agro y conformar zonas de expulsión de mano de obra, especialmente en la zona altiplánica, hace de la hoja de coca el cultivo más rentable: en 1975 el azúcar era cotizada en el mercado internacional en 494,9 dólares por tonelada, mientras que la misma cantidad de este producto en 1979 tenía un valor de 342,1 dólares. Por su parte, hacia 1981 una carga de hoja de coca tenía un valor de 463 dólares.

En el contexto de un alza de precios y una creciente demanda por la hoja de coca, la colonización del Chapare comenzó a intensificarse y el cultivo de coca presentó, en el marco de una colonización

sin asistencia técnica ni apoyo estatal, ventajas incomparables: exigía una gran inversión en mano de obra frente a una inversión reducida de herramientas e insumos agrícolas, el trabajo podía ser realizado por hombres, mujeres y niños y presentaba una alta productividad en predios bajo las cuatro hectáreas, siendo posible realizar hasta cuatro cosechas anuales (Spedding, 2004). De la misma manera, el transporte era fácilmente realizado con la precaria red de caminos que poseía el Chapare durante este período y encontraba rápidamente compradores capaces de absorber la totalidad de la producción de los campesinos.

Durante la década del ochenta se produjo el período de mayor auge del cultivo de coca en la zona. Para el año 1986 había en la zona 76.300 hectáreas de coca (Comité Cívico pro Cochabamba, 1988) cuyo precio variaba de los 40, 9 a los 100,7 dólares por libra. En esta misma década, la economía de la coca representaba un importante porcentaje del PIB de Bolivia y la importancia relativamente marginal de Bolivia como país productor de hoja de coca es alterada constituyéndose en el tercer país después de Perú y Colombia en la producción de esta planta.

Retomando el análisis que realizábamos en el primer capítulo, en relación a las condiciones estructurales que determinaban el intercambio desigual entre países desarrollados y países periféricos, cabe preguntarse si este fenómeno posee características similares en el caso de un negocio de carácter ilegal como lo es el circuito coca-cocaína. Frente a ello, podemos observar que el cultivo de la coca en Bolivia es el último escalafón de un negocio que encuentra su principal mercado en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, país que según las cifras de Naciones Unidas, con sólo un 5% de la población mundial, consume más del 40% del total de drogas ilegales producidas en el mundo, siendo el 80% drogas de origen extranjero, principalmente cocaína y heroína (Zambrana, 1999: 43). En ese marco, el Chapare se encuentra inserto en un negocio que, después del mercado de las armas, es el más lucrativo a nivel mundial, generando 300 mil millones de dólares al año, cifra que representa el 66% de las reservas existentes en todos los bancos centrales del mundo (ONU en Zambrana, 1999: 45).

La inserción de Bolivia en el circuito coca-cocaína reproduce los patrones económicos que se encuentran en la economía formal, a pesar de ser un negocio de carácter ilícito. La profunda crisis en que se encuentra la economía boliviana no logra desplazar el eje de acumulación de una plusvalía absoluta a una plusvalía relativa, priorizándose el cultivo de hoja de coca por ser un cultivo cuya productividad depende básicamente de la explotación intensiva de la mano de obra

familiar y, como en los tiempos del estaño, una producción ligada al mercado externo, cuya demanda no es afectada por la pauperización del campesinado chapareño.

De la misma forma que en la economía formal, el negocio del narcotráfico no entrega grandes dividendos a aquellos encargados de la producción de materias primas. Las cifras reflejan que la mayor parte de los dividendos quedan en manos de los países consumidores y “de tránsito”, los encargados de dar valor agregado al producto y de su distribución. A modo de ejemplo podemos señalar que a cuenta de este negocio, la economía norteamericana recibiría una inyección anual cercana a 120 mil millones de dólares. Las grandes cifras que se manejan en torno al tema del lavado de dinero, otra de las vertientes a través de la cual circula el capital de la narco-economía, indican que aún cuando Bolivia posee secreto bancario que impide la investigación de cuentas bancarias, el blanqueo e inversión de este dinero no es realizado en los países productores, sino en países como Chile, Uruguay, algunas islas del Caribe y en bancos ubicados en Varsovia, Budapest y Moscú por cifras cercanas a los 500 mil millones de dólares anuales (Zambrana, 1999:47).

La dependencia de la demanda externa es flagrante: el precio de la hoja de coca varía sustantivamente de un mes a otro, precarizando el ingreso de los campesinos de manera sustantiva. Para ejemplificar podemos señalar que para el año 1996 una libra de coca en mayo alcanzaba un precio de 92,7 dólares por libra, mientras que en julio sólo llegaba a los 35 dólares por libra. Ello fue particularmente grave a finales de la década del ochenta, cuando el precio de la coca cayó de manera vertiginosa ocasionando muchas veces el abandono de los cicales por parte de los campesinos. El impacto de la economía de la coca en la economía boliviana era tan importante durante ese período que se temía que: “la economía nacional sería un desastre si “repentinamente” la lucha contra el narcotráfico tuviera éxito y de pronto los dólares que genera el entorno de esta actividad cesaran de fluir hacia el país [...] se desencadenaría un proceso de incremento de desempleo abierto a niveles explosivos” (Primera Plana, 1992).

Frente a la caída de los precios de la hoja de coca, los productores optaron por dar valor agregado a su producción, realizando el primer paso de la elaboración de cocaína en laboratorios artesanales y aumentando el volumen de la producción. Siguiendo a Marini, vemos como nuevamente la baja de ganancias es enfrentada por una sobreexplotación de la mano de obra en vez de un aumento de productividad de la misma (Marini, 1991; 1979a): el campesino ya no sólo debe sembrar y cosechar la hoja de coca, sino que debe, por un precio similar, iniciar el proceso de elaboración de cocaína, con los costos

en términos de fuerza de trabajo como en insumos (precursores) que ello implica, aumento de la carga de trabajo sobre la unidad familiar característica de la producción de hoja de coca en el Chapare.

CAPÍTULO III. COCA Y POBREZA RURAL EN EL CHAPARE ¿UNA RELACIÓN CONTINGENTE?

Como señalábamos en el primer capítulo, la pobreza no puede ser caracterizada sólo por criterios estadísticos sino que debe ser definida en conjunto con factores culturales, sociales y políticos. En este capítulo trataremos de caracterizar el impacto del circuito coca-cocaína en la pobreza rural del Chapare a partir de una perspectiva más cualitativa considerando la visión de los propios actores: los cocaleros del Chapare⁶.

PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRODUCCIÓN

Debido a las particularidades de la colonización en el Chapare, ligada estrechamente al auge del cultivo de la hoja de coca, la estructura de propiedad de la tierra se centró en los pequeños propietarios. Migrantes altiplánicos y ex mineros atraídos por las posibilidades económicas de la zona fueron instalándose, poco a poco, en esta área.

El auge de la economía de la coca no alteró las características de la propiedad de la zona, la cual siguió siendo de carácter minifundista y familiar hasta el día de hoy. La mayoría de los predios no superaron nunca las cinco hectáreas. Las grandes extensiones de tierra en manos de un sólo dueño son un fenómeno de importancia marginal y que sólo surge a mediados de la década del noventa, en algunas áreas donde los proyectos de desarrollo alternativo impulsaron la compra de terrenos para el cultivo y procesamiento de los productos agrícolas tropicales por parte de algunas empresas.

A pesar de ello, la mayoría de las empresas que actualmente tienen algún rol en el desarrollo alternativo compran sus productos a los pequeños productores y se encargan sólo del procesamiento, distribución y venta, como podemos ver en el caso del palmito y la piña: “Los mismos entes [...] que financian se han vuelto empresas, compran piñas barato y el intermediario o la empresa que compra estos productos son los que ganan jugosos, tiene jugosas ganancias” (Castillo, 2005).

De la misma manera, la producción siguió estando basada en la mano de obra familiar, aún cuando en tiempos de auge de la coca se contrataban peones para algunas labores, el eje de la actividad

6 Por razones de confidencialidad y frente a solicitud explícita de los entrevistados, los nombres de quienes participaron en el estudio han sido modificados.

productiva siempre estuvo puesto en el trabajo del grupo familiar. La llegada de nuevos colonos se realizaba, en su mayoría, a través de vínculos familiares. Se incorporaba algún peón a la producción con el cual se tenían vínculos familiares o comunitarios, éste aprendía las técnicas básicas del cultivo de la hoja de coca y, acto seguido, llevaba a su mujer para establecerse, en principio en el sistema de mediería: este joven campesino cultivaba un porcentaje de la tierra y entregaba la mitad de su producción al dueño de ésta. Posteriormente accedía a una propiedad en alguna zona, reproduciendo la forma de producción de la zona. Durante los tiempos de auge de la hoja de coca existía, sin embargo, una cantidad de mano de obra flotante proveniente de los valles de Cochabamba que se incorporaba a algunas labores estacionales como son la cosecha o preparación de los terrenos, pero la dirección del proceso productivo siempre estuvo a cargo del núcleo familiar.

TENDENCIA AL MONOCULTIVO

Uno de los cambios más significativos producidos por el cultivo de la coca fue la tendencia al monocultivo que se produjo durante el período de mayor precio de la hoja. La mayor parte de los predios estaban siendo dedicados al cultivo de la hoja, lo cual afectó la importancia que los productos de subsistencia familiar, tanto en términos de la cantidad de terreno dedicado a su producción como del trabajo destinado a éstos. A pesar de que su importancia decayó, éstos nunca desaparecieron completamente: “Había abundante coca, en extensión y se dedicaban también al cultivo de cítricos, de arroz, de plátanos, pero en poca dimensión, en poca extensión” (Castillo, 2005).

Posteriormente, frente a la caída del precio de la hoja y las políticas de erradicación, los campesinos retoman este tipo de cultivos, diversificando la producción familiar a través del desarrollo de un cultivo de especies de carácter comercial y agregando la cría de ganado, aves, etc. Esta tendencia al monocultivo tuvo dos impactos significativos: por un lado aumentó la relación existente entre el Chapare, el valle de Cochabamba y otros países involucrados en la producción, distribución y consumo de drogas:

Los compradores mayormente eran bolivianos y esos encadenaban con los compradores internacionales, los bolivianos venían, intermediarios digamos [...] ellos eran bolivianos, compraban aquí, venían con un montón de dinero compraban y más allá esperaba el extranjero y se iba, encadenaba las compras (S. Pérez, 2005).

Por otro lado, la necesidad de suplir la falta de algunos productos básicos que ya no se cultivaban de la zona implicó que éstos fueran

traídos por comerciantes desde los valles de Cochabamba, aumentando el costo de la vida en la zona chapareña:

Hay muchos productos que vienen del exterior aquí mismo, por ejemplo el azúcar el año pasado costaba entre 100 y 105 bolivianos oscilaba, ahorita está en 140, 145 bolivianos. Por ejemplo el aceite que costaba antes 6 bolivianos, ahora cuesta nueve bolivianos el litro de aceite, entonces los precios han ido subiendo (Castillo, 2005).

De esta manera vemos como el Chapare se configuró como una *economía extravertida* (Flores y Blanes, 1985: 60), puesto que no sólo su producción fue dirigida a un mercado externo, sino que también estableció una relación de dependencia con los valles cochabambinos en función de los productos e insumos necesarios para la subsistencia de los campesinos y de la mano de obra necesaria para la realización de algunas tareas agrícolas específicas en los tiempos de auge de la coca. Siguiendo a Flores y Blanes, podemos decir que la economía de Chapare no se orientó al desarrollo de la región, configurándose un escenario similar a las zonas de extracción minera, en las cuales es imposible concebir su funcionamiento sin el constante flujo de dinero, insumos, alimentos y mano de obra del exterior: “Hay muchas casas abandonadas, ahora la gente mayormente no para, no viene de sus lugares de origen, vienen a cosechar y se van, una cierta cantidad así está porque no permite, no da más” (Domínguez, 2005).

MONETARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

Por otro lado, esta tendencia al monocultivo provoca una fuerte monetarización de la economía, desplazando las formas tradicionales de intercambio, y un aumento de la masa de dinero circulante: “Usted sabe que cuando hay un negocio así como de esa índole da dinero, la gente tenía acceso a 1000 dólares, ahora ya no, ya están apretando el zapato” (S. Pérez, 2005).

Este aumento determinó que, durante los tiempos de auge de la hoja de coca, las nuevas generaciones fueran desvinculándose de la producción familiar y accedieran a oficios y trabajos alternativos, proceso que fue complementado por una emigración dada al alero de la crisis de la economía de la coca y las políticas de erradicación. Este punto lo trataremos más adelante con mayor profundidad.

PRECARIZACIÓN DEL INGRESO

Al desarrollarse en función de una demanda externa, el principal impacto de la economía de la coca en la vida cotidiana de los campesinos y en los niveles de pobreza se relaciona con la *precarización del ingreso en función de las fluctuaciones de precio de la hoja*. Como señalába-

mos en el capítulo anterior, el precio de la hoja de coca es muy variable en cortos intervalos de tiempo y al no existir cultivos alternativos de importancia, los productores se veían completamente indefensos frente a la baja sorpresiva de los precios: “Un tiempo llegó hasta cinco bolivianos la carga de coca, y ese tiempo ya comenzaron ya a irse a sus lugares de orígenes los compañeros por que no daba” (Henríquez, 2005). Esta tendencia es similar a la que han sufrido otros productos agrícolas en el mercado internacional, aunque no debemos obviar algunas particularidades:

[...] La principal característica durante el decenio ha sido la constante caída de los precios [de la hoja de coca] a nivel internacional. Lo anterior indica dos cosas. En lo económico, la madurez y estabilidad del sistema, ya que como sucede con cualquier bien transable agrícola con el tiempo sus precios se van aproximando a sus costos de producción y transacción. En lo criminal, la caída de precios indica el aumento de la impunidad en estas actividades ilícitas (De Rementería, 1997: 30).

IMPACTOS CULTURALES: DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ESCOLARIZACIÓN Y NUEVOS HITOS IDENTITARIOS

En términos culturales, los impactos de la economía de la coca en el área son importantes pero difíciles de cuantificar. En primer lugar, los campesinos se encontraron expuestos a influencias culturales diversas, ya sea de los mismos colonos provenientes de lugares distintos como de personas de otros países, presentes en la zona como parte del negocio del narcotráfico, de las políticas de erradicación o de la ejecución de proyectos de desarrollo alternativo:

Antes de erradicación vivían millones de gente de todo el mundo, no sólo bolivianos no sólo argentinos, no sólo mexicanos, no sólo colombianos, sino que de mundo entero, de mundo entero, esos son los que han traído, los que han dejado la herencia ahora (Díaz, 2005).

Una de estas influencias de importancia fue la ejercida por los dirigentes sindicales mineros que se asentaron en la zona como colonos, traspasando la forma de organización y trabajo sindical que configuró una orgánica muy poderosa al interior del trópico. La misma les permitió resistir las políticas de erradicación y configurarse como un sujeto político de relevancia en la sociedad boliviana, accediendo actualmente a la mayor parte de los municipios. Otra presencia de importancia fue la de los compradores de hoja para la elaboración de cocaína y la mano de obra flotante presente en la zona. Cabe destacar que la configuración cultural de la zona, debido a que la población provenía de diversos lugares de Bolivia, tomó formas muy particula-

res, mostrando un interesante sincretismo entre la tradición minera y la tradición indígena del altiplano.

La presencia cada vez más accesible de escuelas, debido a la gestión sindical, ha permitido que los niños asistan al colegio desde temprana edad, reduciendo los índices de analfabetismo:

Los sindicatos, las comunidades se han organizado y el sindicato ha sido el promotor, digamos así para la apertura de caminos digamos así, para traer incluso una *ripeada*, es decir con piedras para que el camino esté mejor. Igualmente la construcción de escuelas y las postas, todo eso ha hecho el sindicato organizadamente y si no ha sido el sindicato ha sido la central, la central está compuesta por varios sindicatos (Rodríguez, 2005).

El aumento de la escolaridad en la zona produjo un aumento de expectativas por parte de la juventud, lo que agudizó el proceso de desvinculación de los jóvenes del proceso productivo familiar, una mayor presión por empleos en otras ramas de la economía y un paulatino aumento de la migración con el consecuente envejecimiento poblacional de la zona:

La mayoría antes estaba en buenos colegios, por ejemplo, preferían llevar a sus hijos a Cochabamba, a Sacaba, a ciudades intermedias, a sus hijos para que estudien, por ejemplo, tenían la oportunidad de poner a la universidad (Castillo, 2005).

Las influencias culturales derivaron también del mayor acceso a la ciudad de Cochabamba a través de la construcción de caminos, el constante flujo de mano de obra y el acceso a medios de comunicación de masas debido a la disponibilidad de electricidad. Esto produjo, en las nuevas generaciones, dos procesos identitarios importantes aunque contradictorios: por un lado, existe un segmento de la población que apela a un enmascaramiento cultural y un abandono de los elementos asociados a lo indígena como lo es, por ejemplo, el abandono de la vestimenta tradicional de las mujeres, estableciéndose la diferenciación entre las mujeres “de pollera” y las mujeres “de vestido”, en la cual ésta última es connotada positivamente por su asociación a un modelo de belleza occidental.

Por otro lado, existe un segmento de la población que recoge las tendencias a nivel nacional y latinoamericano asociado al resurgimiento de lo étnico como elemento primordial de la identidad, asociado a una valoración de lo propio, de la sabiduría ancestral y de los símbolos asociados a lo indígena. Ejemplo de ello es la reivindicación de la hoja de coca como “hoja sagrada de los ancestros” y la utiliza-

ción de la Whipala⁷ como bandera de una importancia, en términos de identificación, superior a la bandera del Estado boliviano:

El narcotráfico no es problema de nosotros, el narcotráfico es foráneo, ajeno, de extranjeros, no es nuestro, nuestra cultura natal es la coca, producto medicina natural por eso se consume acá, el que no consume la coca no tiene ni las muelas ni siquiera sabe trabajar, consumimos coca siempre y cuando como planta, esa es la coca de nuestros ancestros (Poblete, 2005).

La economía de la coca transformó profundamente al Chapare durante el período de mayor auge. Estas transformaciones, sin embargo, no implicaron que los campesinos cocaleros hayan experimentado los beneficios de participar en el millonario negocio como es el narcotráfico: a finales de la década de los ochenta, luego del período más próspero de la zona, entre 150 y 180 niños de cada mil nacidos morían, frente a una tasa nacional de 102 por mil. De la misma forma, en 1992, luego del período de auge y aún antes de la etapa más violenta de las erradicaciones, el principal municipio cocalero –Villa Tunari– tenía un 96,8% de población pobre según necesidades básicas satisfechas (Instituto Nacional de Estadística Bolivia, 1992). Así también, el ingreso per cápita de las zonas productoras era inferior en un 40% que el promedio nacional y el analfabetismo femenino llegaba al 46% (El Mundo, 1992). Frente a estas cifras, la relación entre los cultivos ilícitos y la pobreza rural ¿es realmente contingente o es causa de la misma? Decir que es una relación contingente sería cerrar los ojos ante la evidencia: las zonas de cultivos ilícitos son reestructuradas radicalmente en función de la producción y circulación de droga, truncando cualquier plan de desarrollo de carácter local y nacional.

CAPÍTULO IV. LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS

Como hemos señalado en los capítulos anteriores, las transformaciones operadas en el Chapare debido al desarrollo de la economía de la coca son diversas. Las profundas modificaciones culturales, económicas, sociales y políticas operadas en la zona nos sirven de marco para la comprensión del impacto en la pobreza rural producido por las posteriores políticas de erradicación implementadas en el área desde finales de la década del ochenta. Para una caracterización de estos impactos, revisaremos previamente el marco internacional a partir del cual se generan las políticas de erradicación y sus principales co-

7 Bandera de siete colores de los pueblos indígenas andino.

rrelatos en el Chapare, para posteriormente identificar los principales cambios en la zona originados a partir de éstas.

LO INTERNACIONAL EN LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS

Las políticas de erradicación en Bolivia son el correlato local de un escenario mundial que tipifica el problema del narcotráfico como una de las prioridades centrales para la seguridad nacional de los Estados más poderosos. Las dos grandes agencias en las políticas antidrogas son la Comunidad Europea y Estados Unidos, siendo éste último el más presente en el Chapare. La influencia de este marco internacional ha encontrado expresión en tres ámbitos: erradicación de cultivos ilícitos y militarización en las zonas cocaleras, la generación de un cuerpo legal nacional e internacional y el desarrollo de planes de desarrollo alternativo.

La erradicación de cultivos ilícitos y militarización en las zonas cocaleras

Durante la administración de George W. Bush se definió el tema de las drogas como un problema de seguridad nacional, poniendo énfasis en el control de la producción más que en la prevención del consumo. A partir de ese momento se destinaron importantes recursos a fortalecer las armadas nacionales y extranjeras, bajo la doctrina de la guerra de baja intensidad (Lanza, 1999). En ese marco, existen tres grandes hitos en la erradicación de los cicales de la zona de Chapare: 1) en 1985 se propone el primer plan trienal y la ley de sustancias controladas, que pone énfasis en la interdicción y erradicación; 2) en 1987, después de graves conflictos en la zona chapareña, se aprueba el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución de los Cultivos de Coca y la Lucha contra el Narcotráfico; y 3) en 1994 se propone la “opción coca cero”, es decir, la erradicación total de los cultivos de coca en un plazo de tres años. Dicha erradicación fue paralizada por la fuerte resistencia de las organizaciones sociales.

De esta manera, el principal esfuerzo se dirigió a erradicar los cultivos de hoja de coca de carácter excedentario, lo que demuestra que:

el Estado prefiere lidiar más directamente con los productores de la hoja y no con los poderosos narcotraficantes, quienes son en realidad los que han producido en última instancia el boom de los cultivos y los precios de la coca (Flores y Blanes, 1984: 234).

A la par, el gobierno buscó controlar y establecer mercados de legales para la hoja de coca, con el fin de evitar que la producción destinada al consumo tradicional se desviara hacia los centros de producción de cocaína. En este punto uno de los sucesos más relevantes

fue la implementación de la “Operación Nuevo Amanecer”, la que se orientó al cierre del mercado de Sacaba. A pesar de ello, el control de los mercados fue más bien escueto, no existió control ni registro de la coca comprada o vendida y estos centros de comercialización absorbieron una parte mínima de la coca producida, debido a que los precios pagados en estos lugares nunca llegaron a igualar los pagados por los productores de pasta básica. Así también, los abusos constantes hacia los productores produjeron un fuerte rechazo a estos espacios:

El gran problema es que no se nos deja a los propios campesinos a los propios agricultores llevar la coca a los diferentes lugares, a los diferentes centros de consumo y ese es el problema porque más bien nos retienen aquí obligándonos de que los intermediarios saquen coca [...], la ganancia no es para el campesino, para el productor, sino que es para el intermediario y de ahí se va desviando al narcotráfico también (Castillo, 2005).

Dicha situación ha sido levemente revertida en los últimos años a través de la generación y control sindical de mercados primarios, que ha permitido una gestión más participativa en éstos. Actualmente, la fuerte presencia política de las organizaciones sindicales chapareñas ha desembocado en un acuerdo entre el gobierno y las Seis federaciones del Trópico de Cochabamba, destinado a la legalización del cultivo de un cato de coca por familia, con el fin de contrarrestar la crisis económica y la consecuente conflictividad que generaba en la zona la erradicación total de los cocales.

En relación a la militarización, se fortaleció la presencia de organismos internacionales especializados y se crearon instituciones de carácter nacional destinadas a controlar las zonas cocaleras, como es el caso de la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Estos instalaron su cuartel general en Chimoré y obtuvieron recursos y entrenamientos de la DEA.

Durante el gobierno de Paz de Zamora, se agudiza la militarización en las zonas cocaleras. Algunos sectores postulan que dicha militarización responde al interés de Estados Unidos de construir un enclave militar en Bolivia ya que presenta ventajas frente a Colombia (por la presencia de las FARC), frente a Brasil (por su mayor independencia económica y jurídica) y Perú (por la presencia de Sendero Luminoso y Tupac Amaru). En ese marco, para 1994 se había construido una embajada norteamericana en La Paz con alta tecnología y enclaves subterráneos, a la vez que se iban sumando la instalación de bases norteamericanas en el Chapare mismo.

La pregunta es ¿cuál es el sentido de invertir en combatir la droga en un país donde la producción sólo alcanza a un 30% de la oferta mundial en cocaína? (Lanza, 1999: 95). Más aún si consideramos que la INTERPOL estima dicha participación en un 10%. La respuesta sería simple:

la guerra a la droga ofrece una buena excusa para el despliegue de la Guerra de Baja intensidad en Los Andes y el Amazonas. Los eventos mostrarían que Estados Unidos está testeando la posibilidad de que Bolivia se convierta en un nuevo centro de operaciones militares de contención de disturbios y de control geopolítico en América Latina (Lanza, 1999: 95).

La generación de un cuerpo legal nacional e internacional

Uno de los hitos fundamentales en la generación del cuerpo legal que dio sustento a nivel internacional a las políticas antidrogas en las zonas cocaleras, es el dictamen de Naciones Unidas que en el año 1961 tipifica definitivamente la hoja de coca como una droga, no estableciendo la diferencia entre ésta y la cocaína y penalizando su producción y comercio. Este dictamen ha tratado de ser revertido en innumerables ocasiones por los países productores de la hoja de coca, sin mayores resultados. Sustentado en este postulado que penaliza la producción de hoja de coca, las políticas de erradicación han encontrado un marco de legalidad internacional que les otorga sentido y significado a nivel local.

El marco legal surgido para el trato de delitos relacionados con el narcotráfico se encuentra determinado por las relaciones “narcotizadas” entre Bolivia y Estados Unidos: la necesidad de acceder a la “certificación” otorgada por Estados Unidos, que permite el acceso a prestamos y beneficios económicos a cambio de una política antidrogas acorde con la del poderoso Estado, ha generado dos instrumentos legales altamente cuestionados por las organizaciones sociales y de Derechos Humanos: un tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos que permite a éste último acceder a un poder supranacional en la persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico y la Ley N° 1008, de jurisdicción nacional.

La Ley N° 1008 es fundamental para comprender el conflicto existente en las zonas cocaleras, especialmente en el Chapare: no distingue entre el cultivo y venta de la hoja de coca y la cocaína, tipificando la producción y venta de ambas como delito. Así, determina arbitrariamente zonas de cultivo y volúmenes permitidos, como también mercados lícitos para la venta de la hoja de coca, ambas medidas absolutamente ciegas frente a elementos sociales y culturales profundamente arraigados en la cultura indígena en torno a la hoja de coca.

Existen en la Ley N° 1008 una serie de aspectos que legalmente son inconcebibles desde el punto de vista constitucional y de respeto a los Derechos Humanos (Lanza, 1994: 71):

1. Desconoce las garantías constitucionales: presume culpabilidad hasta que se pruebe lo contrario. Aplica confiscación de bienes vulnerando el derecho de propiedad, las detenciones no se realizan bajo procedimientos regulares y las declaraciones son tomadas en contra de la voluntad de los acusados.
2. Desarticula las garantías procesales por el carácter del tribunal juzgador y la cuestión de la jurisdicción nacional: crea la judicatura especial de los juzgados de sustancias controladas, incorporando un hecho de excepción. Los jueces no poseen competencia territorial.
3. Vulnere los derechos humanos: ejerce violencia contra los productores y los dirigentes de las organizaciones sociales, incomunica a los presos más allá de lo legal y viola los domicilios de las personas en allanamientos fuera de los procedimientos, establece la impunidad para los miembros de la FELCN y los agentes de la DEA los que no pueden ser juzgados en caso de cometer excesos (Red Andina de Información y CEDIB, 1996).
4. Rigurosidad sin precedentes: las penas son extremadamente duras, no tipifica bien los delitos y las penas no se corresponden con las figuras jurídicas. No distingue entre sindicado y encausado.
5. Desconoce la independencia del juez: contempla sanciones para los jueces que no apliquen los plazos previstos, establece a la FELCN como base incuestionable de cualquier acusación, sin capacidad de que el juez discrepe. Los procesos deben ser revisados por superiores y la absolución también debe ser consultada. Aplica sanciones a los abogados defensores.

A pesar del carácter draconiano de la legislación antidrogas en Bolivia, los resultados son irrisorios. La mayor cantidad de detenidos son campesinos, mujeres y jóvenes, cuyo encarcelamiento no afecta el negocio del narcotráfico (Flores y Blanes, 1984).

La elaboración de planes de desarrollo alternativo

La primera estrategia de desarrollo alternativo fue elaborada en 1990, bajo el Gobierno de Paz Zamora. Dicha estrategia propone reemplazar la economía de la coca y derivados, reponiendo empleo y generando un desarrollo alternativo capaz de revertir el monocultivo (Lanza, 1999). Por distintos motivos, esta estrategia nunca llegó a ser exitosa, siendo Los Yungas la primera zona en ser aplicada. Se plantó una va-

riedad de café incapaz de resistir el clima de la zona, fue realizado sin participación de los productores de coca y sin un estudio de mercado que permitiera introducir los productos con un buen precio.

En el Chapare, los proyectos con fondos de Estados Unidos que se privilegiaron fueron en las zonas catalogadas como expulsoras de migrantes y estaban condicionados a la erradicación de la coca. Se destinaron 48 millones de dólares, de los cuales 21 millones fueron destinados a gastos internos de la USAID (consultores norteamericanos), 7 millones a gastos de los funcionarios nacionales, 10 millones a los valles catalogados como expulsores de migrantes y sólo 10 millones llegaron a ser invertidos directamente en el Chapare (Lanza, 1999: 47). El mayor aporte de dicho programa fue la construcción de algunos caminos, pero nunca llegó a cumplir sus metas, pues poseía una serie de problemas: 1) los productos de sustitución no fueron bien estudiados, se intentó con 30 cultivos distintos (ejemplo, pimienta, palmito, jengibre), sin tomar en cuenta las características del mercado, climáticas, topográficas y de transporte; y 2) desorganización en el manejo de los programas por parte de las instituciones encargadas.

Los proyectos de Naciones Unidas no estuvieron condicionados a la erradicación de la coca, pero no tuvieron rentabilidad pues no se tomaron en cuenta variables significativas de la región como clima, el transporte y las características productivas de la zona. Uno de los principales problemas que posee el desarrollo alternativo hoy en Bolivia es su falta de continuidad, pues los programas no se insertan en una estrategia de desarrollo regional o nacional, sino que constituyen casos aislados (ILDIS, 1995). Asimismo, no se ha establecido un mecanismo que permita la participación de los campesinos en tanto sujetos organizados que son, sino que contempla una lógica de enfrentamiento hacia los sindicatos, que impide la participación y decisión real de los productores de coca. La compensación económica ofrecida por la erradicación de los cicales no alcanzó a llegar a un año de productividad en caso de conservarlos y la inversión en un desarrollo alternativo fracasado son muy inferiores a las pérdidas ocasionadas por la erradicación de la coca.

IMPACTOS DE LA ERRADICACIÓN EN LA POBREZA RURAL

Las modificaciones provocadas en el área y sus pobladores por el cultivo y comercialización de la hoja de coca son de gran importancia, como vimos en el capítulo anterior. La tendencia al monocultivo, desarrollada durante el período de auge de la coca, determinó que las políticas de erradicación impactaran fuertemente a la población, no sólo por la violencia con las que fueron ejecutadas, sino por la aguda crisis económica que desencadenó en la zona.

La erradicación fue fuertemente resistida por los sindicatos chapareños. Esta resistencia se explica por una serie de características geográficas y climáticas de la zona, que hacían casi imposible la introducción de cultivos alternativos tan productivos como la hoja de coca en predios pequeños: “Nosotros hemos cultivado la coca porque hemos vivido más que todo en serranías, no hay otro, hemos hecho experimentos, pero no da, da sólo coca” (Poblete, 2005).

Dedicábamos la mayor parte al cultivo de la coca porque hay sectores que la tierra no es fértil no es buena para que dé plátano o banano o papaya ¿no? Sólo sirve para la coca. En general todos tienen coca (Domínguez, 2005).

Otro factor que influye en la resistencia cocalera son las características de la producción familiar campesina, las que hacen de la reconversión productiva un proceso en extremo riesgoso para la supervivencia de las familias. Si revisamos el concepto de pobreza que estamos utilizando para el caso de esta investigación, podremos ver que las familias cocaleras, si bien poseían pequeñas propiedades rurales, se encontraban especialmente vulnerables a los cambios y problemas productivos puesto que sus cultivos, al ser básicamente de supervivencia, no les permitían resistir ciclos improductivos, de sequías, inundaciones o repentinas bajas de precios. Los impactos producidos por la erradicación los revisaremos en detalle a continuación.

Precarización del ingreso, cambios en la forma de producción y aumento del costo de la vida

En un primer momento, la erradicación produjo una pauperización extrema de la población chapareña, debido a que los proyectos de desarrollo alternativo se encontraban aún en etapa de experimentación cuando la primera oleada de erradicación forzosa fue llevada a cabo: “Antes de la erradicación, había, mucha gente tenía su dinerito, tenía todo qué comer, o sea bien, pero después de la erradicación que ha habido, ha bajado todo” (Moreira, 2004); “La única planta, la única subsistencia de la familia del trópico de Cochabamba era la coca, y cosechaban hartito, entonces una vez llegada la erradicación, va a tener que bajar la economía” (Castillo, 2005); “Hemos sufrido erradicaciones forzosas, cuando vino la reducción forzosa toda la coca se arranca, no sabíamos con qué íbamos a vivir” (Poblete, 2005).

La conflictividad en la zona, desatada por la fuerte resistencia de los sindicatos a las erradicaciones forzosas, se expresó en bloqueo de caminos, centrándose en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, la principal vía de comunicación del Chapare con la región. Esto encareció los servicios de transporte y comunicaciones, así como los pro-

ductos manufacturados y de primera necesidad que los campesinos compraban a los productores de los valles de Cochabamba: “Los bloqueos atemorizan al turista y al comerciante, temen que en cualquier rato haya un paro, haya un bloqueo, no hay garantía para nadie acá” (M. Pérez, 2005).

La ausencia de cultivos alternativos que permitieran la mantención de las familias mientras se producía una reconversión productiva determinó que una gran parte de las familias chapareñas optaran por el cultivo ilegal de la hoja de coca, transformando el sistema de producción de la tala y roza que antes era utilizado, con el fin de evitar la detección de éstos por los helicópteros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR):

Después de la reducción forzosa, la crisis ha seguido aquí en el Chapare, pero hay quienes hemos permanecido aquí, hemos plantado la hoja de coca, aunque bajo árboles para sustentar a la familia, porque acá la naranja hay veces, los cítricos está en tres bolivianos, dos bolivianos el cien, y eso se cosecha una vez al año ¿no?, eso a la familia casi no abastece (M. Pérez, 2005).

Estas modificaciones en el sistema de cultivo produjeron una baja en la calidad y cantidad de la hoja de coca producida, puesto que la densidad del cultivo era claramente menor y muchas veces la hoja era cosechada antes de llegar a su tamaño óptimo, por miedo a que llegara la erradicación y se produjera una pérdida total de la cosecha. De esta manera, la hoja de coca del Chapare fue quedando marginada del circuito de consumo tradicional, pues para el “acullico”⁸ la hoja producida en Los Yungas poseía características más adecuadas. Durante las erradicaciones también se empiezan a gestar transformaciones en la mano de obra utilizada para el cultivo, pues muchos campesinos cocalleros fueron procesados por la Ley N° 1008. Esto implicó necesariamente que en algunos casos la producción y el comercio se feminizara, potenciando el rol de la mujer en el ámbito productivo y político. Debido a que el eje organizacional en esta zona fue siempre el sindicato, se produce un enfrentamiento colectivo del conflicto y de las labores productivas, fortaleciéndose la organización sindical de manera muy importante, como veremos más adelante.

8 Forma de consumo tradicional de la hoja de coca, que consiste en la masticación de las hojas junto con lejía.

Migración y diversificación de cultivos

La paralización de las erradicaciones por las fuertes movilizaciones sindicales no mejoró la situación de pobreza en la zona. Este fenómeno se debió a dos grandes razones: por un lado, la hoja de coca del Chapare no poseía la calidad suficiente para recuperar su lugar en el mercado tradicional y el fuerte control militar en la zona había determinado una relativa migración de los compradores del narcotráfico hacia otras zonas de Bolivia y de América Latina. Por otro lado, se produjo a principios de la década del noventa una fuerte baja del precio de la hoja de coca a nivel internacional que hizo que la venta de ésta no fuera suficiente para la subsistencia de las familias, no compensando la inversión de trabajo y la precariedad económica (por la siempre inminente posibilidad de las erradicaciones).

Esto hechos dispararon dos fenómenos de gran importancia: por una lado, una migración de las zonas cocaleras hacia otros lugares de Bolivia con el consecuente abandono de propiedades y, por otro lado, una diversificación de la producción. En el primer caso, vemos que las familias de colonos que habitaban el Chapare deciden retornar a las pequeñas propiedades rurales del altiplano o migrar hacia los centros urbanos, siendo el destino más recurrente la ciudad de Santa Cruz:

La mayoría de gente se ha ido saliendo después de la erradicación de la coca, y ahora casi no hay nada, no hay mucha gente, se ha ido saliendo a la ciudad, más bien con el cato que han conseguido la gente está volviendo a regresar porque lo único que les daba dinero era la hoja de coca, eso vendían mayormente en esta central, vivían de coca, no producen mayor parte las frutas, el distrito de villa 14 de septiembre casi no produce por ejemplo tomate, en muchas partes hay terrenos que son para eso pero aquí no, no producían eso (Moreira, 2005).

En el caso de los campesinos que permanecen en la zona, la baja del precio de la hoja de coca y la inminente posibilidad de la erradicación, impulsa la introducción de manera más intensiva de cultivos alternativos que se habían mantenido como cultivos absolutamente marginales para la economía familiar. Tal es el caso del banano, los cítricos, las papayas, los tomates, el arroz. Se introduce también la cría de ganado a pequeña escala: “Ese tiempo más se cultivaba la coca, se cultivaba la coca. Ahora un poco ha disminuido con todo, con los problemas que hay ¿no? Y ahora se cultiva, también la coca, pero también otros productos y también se ha empezado con la ganadería” (Rodríguez, 2005).

Penetración del desarrollo alternativo

Como se mencionara anteriormente, la erradicación de la hoja de coca trajo consigo la implementación de planes de desarrollo alterna-

tivo. La extrema situación de los campesinos ante la ausencia de su principal cultivo hizo posible una mayor penetración del desarrollo alternativo en la zona, puesto que se hizo urgente diversificar la producción. Esto incentivó a algunos sindicatos o colonos del Chapare a participar en estos proyectos, experimentando con los cultivos de piña, pimienta y palmitos.

Los proyectos de desarrollo alternativo, a poco de implementarse, mostraron que la rentabilidad de estos cultivos estaba muy por debajo de lo que era posible obtener con la hoja de coca. Los cultivos de piña implicaban una inversión inicial y de trabajo que no compensaba el precio de venta y los palmitos estaban sujetos a un fuerte control de calidad que implicaba que una buena parte de la producción no fuera aceptada por las plantas envasadoras, las que tampoco pagaban los tallos al precio que inicialmente fue pactado con los productores:

Yo me acuerdo muy bien que yo a veces le ayudaba a vender a mi hermano el es productor de piña, y semejante esfuerzo a veces ni alcanzaba para transporte, por ejemplo, una camionada de piñas el transporte cuesta a Cochabamba entre 1.000 y 1.100 bolivianos, y una camionada de piña simplemente lleva 3.500 piñas, imagínese si vendes cuatro por un boliviano agarras mil bolivianos. Entonces no ganas, simplemente, donde está la cosecha, el desyerbado, los herbicidas que has usado en cuidar esa planta, entonces no da resultados. (Castillo, 2005).

Muchas veces hemos empezado con palmito, al principio nos decían que costaba un palmito un dólar, ahora cuestan cincuenta centavos, no da pues (Domínguez, 2005)

El palmito la unidad cuesta, el kilo estaría en 6 o 7 dependiendo del tamaño, 6 o 7 palmitos hacen un kilo, entonces el kilo estaría en 2,50 bolivianos. Entonces cada palmito saldría a 50 centavos a 60 centavos, dependiendo ¿no? de la oferta y la demanda. Pero un kilo de coca estaría pues alrededor de 20 bolivianos, entonces hay mucha diferencia (Castillo, 2005).

Lo que más sentían los productores como un obstáculo para cualquier proyecto de desarrollo alternativo, era la ausencia de un mercado para los nuevos productos que fuera capaz de pagar precios relativamente rentables. Ello estaba limitado por la falta de competitividad de los productos del desarrollo alternativo a nivel internacional y por el escaso consumo interno de éstos:

Aquí tiene que haber mercado, no hay mercado, claro hay mucha gente que produce cítricos, naranjas, todo aquello pero quién va a comprar, dónde vamos a llevar, más que todo es importante es mercado, sino hay mercado ¿quién va a comprar? (Poblete, 2005).

De esta manera y frente al nuevo aumento del precio de la hoja de coca, los productores comenzaron a plantear la necesidad de una legalización de un cato de coca por familia, capaz de asegurar la subsistencia mínima y destinado a ser complementado con cultivos alternativos, permitiendo un cierto margen para la innovación productiva. Este acuerdo fue logrado durante el transcurso de esta investigación: “Después de este acuerdo que hemos tenido con el gobierno, después de este cato de coca, bueno, por lo menos tenemos un pedazo que es casi respetado, eso cada cosecha ya no tendríamos ese miedo que venga la erradicación forzosa” (M. Pérez, 2005).

Asimismo, también existe la demanda del aprovechamiento de la hoja de coca como producto medicinal de exportación. Esta segunda demanda no ha sido aceptada y su canalización depende exclusivamente de establecer a nivel de la legalidad internacional la distinción entre hoja de coca y cocaína, lo que permitiría su despenalización y uso terapéutico:

Las organizaciones han propuesto que se legalice la coca para el consumo legal y si eso se legaliza entonces las organizaciones se harían cargo del control, pero nunca, nunca han podido entender y siempre han querido satanizar y erradicar nuestra hoja, no se puede hacer porque es parte de la cultura y si es parte de la cultura no se puede sacar, es como la vida misma (Rodríguez, 2005).

A pesar de esto, el desarrollo alternativo implicó una inversión en infraestructura que fue bastante importante para el Chapare. La construcción de puestos de salud, escuelas y sobre todo de caminos subsanaron en cierta medida el aislamiento de la población en términos de algunos servicios básicos. Sin embargo, esto no fue evaluado positivamente puesto que fue una inversión pequeña y no focalizada a los aspectos más sentidos de la población, debido a la ausencia de un proceso participativo:

Tenemos nosotros documentos y fuentes que maneja nuestra comunidad de que mayormente el 80% se va en gastos de funcionamiento, claro que el gobierno y las fuentes internacionales señalan que se ha invertido mucho dinero en desarrollo alternativo pero no hay resultados, entonces si se gastan en eso, en sueldos, nunca va a haber desarrollo, y no hay quien les controle (Castillo, 2005)

“Todo se ve en papeles, pero en la realidad no hay desarrollo alternativo, más bien con esa plata ellos compran umopares, armamentos, empleados, ellos no más ocupan un 80%, se hacen riquísimos, vienen y se van más ricos de ricos, no es beneficio para nosotros el desarrollo alternativo, inclusive a través de la prensa sacan a comunidad inter-

nacional que en Chapare, todos tiene agua potable, tiene educación y sin embargo no es así, para quienes vivimos en lejanos, en lugares aledaños, no conocen siquiera la luz, ni siquiera tienen agua potable, más que todo nuestra gente está sufriendo (Poblete, 2005).

Los sindicatos, principales representantes de la población, son marginados de la administración de los recursos y desarrollan estrategias propias de implementación de servicios que son diagnosticados como necesarios por la comunidad: pago de profesores, construcción de escuelas, contratación de personal de salud, entre otros.

El mejoramiento de la calidad de vida en términos de servicios, sólo es percibido como adecuada cuando la gestión y administración de los recursos es tomada por el municipio en manos del Movimiento al Socialismo:

Ahora recién el Estado a través del municipio está llegando para construir nuevas unidades educativas o nuevas, puestos sanitarios. Esto ha pasado en la zona del trópico más que nada cuando hemos tomado las alcaldías y es la misma federación, la misma organización junto con la alcaldía hacen sus planes operativos y así se está promoviendo, algunas escuelas, se está un poco mejor que cuando llegamos (Rodríguez, 2005)

Fortalecimiento de la organización sindical

La organización sindical del Chapare ha sido, como hemos visto en los capítulos anteriores, sustento fundamental de la colonización del Trópico. Los campesinos nunca se enfrentaron a las políticas de erradicación de manera individual, sino que entraron en la escena del conflicto y, por consiguiente, a la vida política nacional como un sujeto colectivo. Las primeras erradicaciones forzadas potenciaron las organizaciones sindicales: los sindicatos constituyeron sus propias fuerzas de choque, los Comités de Autodefensa de la Hoja de Coca, destinadas al enfrentamiento con las fuerzas militares. Además apoyaron a las familias en la emergencia económica y en la necesidad de suplir la mano de obra de los cocaleros procesados por la Ley N° 1008.

A partir de este sujeto colectivo, se generó un discurso que permitió a los individuos establecer la equivalencia entre hoja de coca –hoja de nuestros antepasados– y símbolo de soberanía nacional, mostrando así la resistencia a la erradicación de la hoja de coca como una resistencia a la intromisión sobre la soberanía de Bolivia y ante el desprecio de las tradiciones indígenas por parte de Estados Unidos.

Las sucesivas movilizaciones y el logro de demandas colectivas fortaleció la organización cocalera y la impulsó a la formación de su

propio partido político: el Movimiento al Socialismo (MAS). Aunando la construcción simbólica de territorio como espacio de construcción y poder sindical, la resignificación de los hitos identitarios indígenas a una fuerte crítica de carácter macrosocial, el Movimiento al Socialismo arrasó los municipios del Chapare y posteriormente los del departamento de Cochabamba, constituyendo un núcleo territorial de poder incuestionable hoy en día:

[Las políticas antidrogas] son un pretexto para hacer presencia, para controlar, porque ven que el movimiento al socialismo está avanzando y en ese sentido, no les gusta, entonces con la presencia, con el pretexto de la lucha contra las drogas y ahí pueden controlar (Rodríguez, 2005).

Sin embargo, este proceso no estuvo falto de contrariedades. La dura retórica de los sindicatos frente al desarrollo alternativo provocó inicialmente un quiebre en la organización cuando algunos sindicatos o centrales decidieron participar:

Sólo se han aprovechado algunos compañeros, el desarrollo alternativo, nosotros dijimos una vez, sólo era para matar a los compañeros a bala, a gas, eso era el desarrollo alternativo. Que lindo iba a ser, eso, tanta cantidad de plata, se iban a construir coliseos, colegios, quien iba a estar en contra del desarrollo alternativo. Sólo ha sido un fracaso, pero gracias a Dios, felizmente, esos compañeros que antes estaban en contra nosotros, ahora están con nosotros, y eso ahora estamos trabajando juntos, o sea la organización sindical y la asociación, juntos estamos trabajando para ver que haya realmente un desarrollo alternativo para los compañeros (M. Pérez, 2005).

De esta manera, vemos que el principal rol de la organización sindical hoy es el desarrollo de actividades económicas alternativas con el fin de erradicar la pobreza, el incremento del acceso a servicios y el control del narcotráfico:

Nadie quiere que haya narcotráfico acá, hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, si es que fomentamos el narcotráfico seguramente podría haber mucha drogadicción ¿no? Como acuerdo que hemos tenido entre sindicatos ¿no? Control interno para que si hay algún compañero que o se alquila una poza de maceración, ese lote se caduca y el compañero se hace expulsión (M. Pérez, 2005).

CAPÍTULO V. CONSIDERACIONES FINALES

El presente capítulo pretende ser el necesario tránsito entre los conceptos teóricos de largo alcance, expuestos en el primer capítulo y la data etnográfica desarrollada en los capítulos posteriores.

La economía internacional de la coca, según hemos podido observar a través de esta investigación, a pesar de que se estructura al margen de los parámetros legales de los intercambios económicos, posee características similares a otro tipo de intercambios establecidos entre países de desarrollo desigual. Para Hinkelammert (1974), una de las características del desarrollo desigual entre centro-periferia y de la explotación del primero sobre la segunda, es la existencia de la posibilidad de pleno empleo de la fuerza de trabajo en el centro y la existencia de subempleo en la periferia⁹. En el caso de la economía de la coca, observamos que el circuito se estructura en base a tres actores: los productores de la materia prima (hoja de coca y, en algunos casos, pasta de coca), los productores de clorhidrato y los distribuidores.

En el Chapare, espacio en el cual se encuentra localizada la producción de materia prima, observamos que el carácter familiar de la producción implica un subempleo de la mano de obra, que utiliza el factor trabajo a través de medios de producción de baja productividad: sistema de cultivo de tala y roza basado en la mano de obra familiar y en pequeñas propiedades rurales, lo que implica también una pérdida de las ventajas productivas de la extensión de los cultivos. Esta sub-utilización de la capacidad productiva del trabajo es un claro indicador de dependencia (Hinkelammert, 1974: 48). De ello se deriva que la participación de los campesinos de la zona en el circuito del narcotráfico, se limita al cultivo de la hoja de coca y, en casos muy puntuales, al procesamiento de ésta en su primera fase. El desequilibrio económico entre centro y periferia se agudiza en el caso de la economía de la coca, puesto que su carácter ilegal implica una serie de restricciones que hacen que el proceso reduzca su productividad con el fin de respetar las políticas de interdicción y dificulta más un proceso de industrialización.

Considerando que el negocio del narcotráfico produce suntuosos dividendos, de los cuales la principal ganancia se estructura en el proceso elaboración de clorhidrato y distribución de la cocaína, no es de extrañar que las políticas internacionales antidrogas se enfoquen al control de la producción de las materias primas y las zonas cocalleras, evitando así que los productores de hoja de coca aumenten su nivel de participación en este negocio a través del procesamiento de la hoja y producción de clorhidrato. El control militar de las zonas cocalleras permite asegurar la mantención del subempleo, puesto que los campesinos, para evitar las erradicaciones, utilizan una forma de

9 Por subempleo se entiende también el empleo de mano de obra con medios de producción tradicionales y de poca productividad.

producción a través de medios tradicionales que no permite el aprovechamiento pleno de su productividad.

Por otro lado, el nivel de conflictividad que implica la producción de la hoja de coca, en términos de las políticas de interdicción, sus costos sociales y de estabilidad política, hace que para la mantención del ciclo productivo de la cocaína sea más conveniente destinar un porcentaje de recursos, a veces superior al superávit extraído de las periferias subdesarrolladas, para la estabilidad del sistema. Es por ello que, si bien los fondos destinados a proyectos de erradicación de los cultivos de la coca parecen ser millonarios, permiten al centro asegurar la estabilidad del circuito internacional de la cocaína, manteniendo la actual estructura de dependencia en el intercambio: “La parte del producto extraído en las periferias desequilibradas y que pasa al centro, es más pequeña que la parte del producto desperdiciado por los centros desarrollados en función de la estabilidad del mecanismo de extracción” (Hinkelammert, 1974: 51).

La escasa productividad de la mano de obra en la zona del Chapare que, como hemos consignado anteriormente, representa uno de los indicadores más claros del desarrollo desequilibrado en las periferias, pues intenta compensar la baja tendencial del precio de las materias primas en el mercado internacional, a través del mecanismo de sobreexplotación de la mano de obra (Marini, 1991). Debido a las características propias del negocio del narcotráfico, las posibilidades de producir un cambio en la productividad de la fuerza de trabajo encuentra aún más límites que en la esfera de la economía formal.

Esto implica que las familias chapareñas en situación de pobreza transitoria, es decir, en una situación de extrema vulnerabilidad frente a las variaciones de la producción y el precio de ésta, deban enfrentar la baja de precios, las erradicaciones y el encarecimiento de los productos manufacturados doblando la cantidad de trabajo puesto por el grupo familiar para la supervivencia. Así, vemos que los campesinos deciden diversificar los cultivos, introducir cría de ganado y otras labores productivas que demandan tiempo y fuerza de trabajo de la unidad familiar.

Debido a que la economía de la coca del Chapare se desarrolla en un territorio colonizado, casi en su totalidad, de manera espontánea y basada en un modo de producción familiar, aquellas unidades encargadas de la elaboración del clorhidrato y de la distribución de la cocaína no requieren hacerse cargo de los costos que implicarían una mejor calidad de vida de la fuerza de trabajo. Así, el costo del acceso a los servicios básicos es absorbido en una primera instancia por los mismos productores a través de los sindicatos y, posteriormente, por los municipios e instancias estatales de Bolivia. Vemos como el centro

económico del circuito internacional de la cocaína no sólo extrae la materia prima a costos muy bajos, sino que además traspasa los costos de la mantención de la mano de obra a los mismos productores y al Estado boliviano.

Los costos de las políticas de control del narcotráfico que permiten la estabilidad del sistema de extracción, así como la baja productividad de la mano de obra, son en gran parte traspasados a los países productores, mientras que los costos sociales, culturales y políticos de dichas políticas son transferidos de manera total a los países encargados del cultivo de la hoja de coca. Todo esto implica que la situación de pobreza de los productores de la hoja de coca no varíe, a pesar de permanecer dentro del circuito. Muy por el contrario, se encuentran expuestos a las fluctuaciones de precios, los desastres naturales propios de un ambiente natural hostil como es el Trópico de Cochabamba, a la violencia de las políticas de erradicación destinadas a otorgar estabilidad al circuito de la cocaína y al desamparo de tener que recurrir a su propia organización para obtener servicios básicos como son el agua potable, el alcantarillado, los caminos, las escuelas y los centros de salud.

BIBLIOGRAFÍA

- Bambirra, Vania 1974 *El capitalismo dependiente en América Latina* (México: Siglo XXI).
- Bambirra, Vania 1978 *Teoría de la Dependencia: una anticrítica* (México: Siglo XXI).
- Castillo, Mayarí 2004 “Movimiento cocalero en Bolivia: Violencia, Discurso y Hegemonía” en *Gazeta de Antropología* (Granada) N° 20.
- Comité Cívico Pro Cochabamba 1988 *Coca, Foro Nacional Sobre Problemática Coca – Cocaína* (Bolivia: Arol).
- De Rementería, Iván 1997 “La economía política de las drogas en la década de los noventa: una nota de síntesis” en Hopenhayn, Martín (comp.) *La grieta de las drogas: desintegración social y políticas públicas en América Latina* (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
- Dos Santos, Theotonio 2003 *La Teoría de La Dependencia: Balances y Perspectivas* (Buenos Aires: Editorial Plaza y Janés).
- FAO 1998 *Potencialidades del desarrollo agrícola y rural en América Latina y el Caribe* (Roma: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación).
- Flores, Gonzalo y Blanes, José 1984 *¿Dónde va el Chapare?* (Cochabamba: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social).

- Grebe, Horst. 2002 "Las relaciones económicas externas de Bolivia en la globalización financiera" en Gambina, Julio (comp.) *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Hinkelammert, Franz 1974 *Dialéctica del desarrollo desigual* (Buenos Aires: Contraseña).
- ILDIS 1995 *Desarrollo alternativo: utopías y realidades* (Bolivia: ILDIS).
- Lanza, Gregorio 1999 *La Coca Prohibida* (La Paz: CEDIB).
- Laserna, Roberto 2003 "El Campo y la desigualdad en Bolivia" en *Los Tiempos* (Cochabamba) 12 de diciembre.
- Marini, Mauro Ruy 1979a "El Ciclo del Capital en la Economía Dependiente" en Oswald, Úrsula (coord.) *Mercado y Dependencia* (México: Nueva Imagen).
- Marini, Mauro Ruy 1979b "Plusvalía Extraordinaria y Acumulación de Capital" en *Cuadernos Políticos* (México) N° 20.
- Marini, Mauro Ruy 1991 *La dialéctica de la dependencia* (México: Ediciones Era).
- O'Donnell, Guillermo 1999 "Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas" en Tokman, Victor y O'Donnell, Guillermo (comp.) *Pobreza y Desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: Paidós).
- Prebisch, Raúl 1999 "La Industrialización en América Latina" en López, Francisco (comp.) *El Pensamiento Social Latinoamericano en el Siglo XX* (Caracas: UNESCO) Tomo I.
- Quijandría, Benjamín; Monares, Aníbal y Ugarte de Peña Montenegro, Raquel 2000 *Hacia una región sin pobres rurales* (Santiago de Chile: FIDA).
- Red Andina de Información y CEDIB 1996 *Violación de los Derechos Humanos bajo la ley 1008* (Cochabamba: CEDIB).
- Salama, Pierre y Valier, Jacques 1996 *Neoliberalismo, pobreza y desigualdades en el tercer mundo* (Buenos Aires: Miño y Dávila).
- Spedding, Alison 2004 *Kausachun Coca, economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare* (La Paz: PIEB).
- Stefanoni, Pablo 2003 "Hegemonía, Discursos y Poder" en *Temas Sociales* (La Paz: UMSA).
- Toranzo, Carlos 2002 "Bolivia: década y media de cambios políticos y económicos" en Bouzas, Roberto (comp.) *Realidades nacionales comparadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay* (Buenos Aires: Altamira).
- Zambrana, Jebner 1999 *Guerra antidrogas: entre halcones y palomas* (La Paz: Fondo Editorial de la Cámara de Diputados).

Zegada, María Teresa 2002 “Dinámica política en el Trópico: actores, conflictos y estrategias destructivas” en Argandoña, Alvaro y Ascarrunz, Carla (comp.) *Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios Para el Desarrollo Sostenible* (Cochabamba: UMSS – Centro de Estudios de Población).

————— 1992 “Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo” en *El Mundo* (La Paz) 27 de septiembre.

————— 1992 *Primera Plana* (La Paz) 2 de agosto.

ENTREVISTAS

Entrevista a Manuel Castillo, Villa Tunari, junio del 2005.

Entrevista a Santiago Pérez, Puerto San Francisco, febrero del 2005.

Entrevista a José Domínguez, Villa 14 de Septiembre. Febrero del 2005.

Entrevista con Cristóbal Henríquez, febrero del 2005.

Entrevista a Pablo Díaz, Eterezama, febrero del 2005.

Entrevista a Andrés Rodríguez, San Pedro, febrero 2005.

Entrevista a Manuel Castillo, Villa Tunari, junio del 2005.

Entrevista a Juan Poblete, Shinahota, junio del 2005.

Entrevista a León Moreira, Villa 14 de Septiembre, junio del 2004

Entrevista a Santiago Pérez, Puerto San Francisco, febrero del 2005.

Entrevista a Andrés Rodríguez, San Pedro febrero del 2005.

Entrevista a Mariano Pérez, Villa 14 de Septiembre, junio del 2005.

Entrevista a León Moreira, Villa 14 de Septiembre, junio del 2005.